

SOBRE DATOS Y CONCEPTOS

La evaluación o análisis del impacto o tamaño de un desastre se complica en la medida en que exista confusión en términos de los datos producidos y distribuidos por fuentes oficiales o por los medios de comunicación, y en los conceptos utilizados. En el caso de las inundaciones, varios problemas de esta naturaleza pueden ser identificados.

Primero, no hubo ni definición ni consistencia en la terminología utilizada para reportar los impactos en la población. Así, por ejemplo, mientras que la CNE no utilizó en sus informes el concepto de "damnificados", la prensa insistía en utilizarlo de forma inconsistente refiriéndose a veces indiscriminadamente al número de personas "evacuadas", "aisladas" o "afectadas". "Afectadas" y "aisladas" o incomunicadas se utilizaron como si fueran lo mismo. La necesidad de un glosario que claramente distinga y defina estos y otros términos se perfila como importante para ayudar en el manejo adecuado de la información que se difunde entre el público en general.

Segundo, las mismas altas autoridades de la CNE introdujeron tempranamente valoraciones insustanciosas en algunas afirmaciones en cuanto a la magnitud (e impacto) del desastre. Así, el presidente de la Comisión fue citado por la prensa afirmando que las inundaciones eran las "peores" en la historia del país y que "en cuanto a sus proporciones, es tres veces mayor que los desastres producidos por el Huracán Juana" (ocurrido este último en octubre de 1988) (*Diario La República*, 12/12/93). Estas afirmaciones se hicieron sin tener acceso a ninguna evaluación sectorial preliminar ni mucho menos integral, del impacto de las inundaciones.

Estas valoraciones parecen haberse emitido tomando en cuenta solamente el número de pobladores "afectados" y los "aislados" durante la emergencia como tal, sin considerar el impacto directo e indirecto a cor-

to, mediano o largo plazo de las inundaciones en términos de la pérdida de vidas, infraestructura, producción, empleo, etc.

Para poner en perspectiva el "tamaño" del desastre, en términos comparativos, si bien es cierto que el número de personas aisladas durante horas o días era el mayor de cualquier inundación de este siglo, esto en sí no constituye una forma de medir de manera integral la gravedad del desastre sino más bien una "medida" del tamaño de las operaciones de socorro necesarios en la fase inmediata o de emergencia (distribución de alimentos, control de epidemias, etc.). Al analizar comparativamente las inundaciones asociadas con el huracán Juana en 1988, éstas tuvieron un impacto localizado en numerosas comunidades de la Costa Pacífica con un total de unos 25 muertos.

Entonces, desde la perspectiva de la vida humana, Juana podría calificarse como cinco veces peor que las recientes inundaciones. En cuanto a las inundaciones de agosto de 1991 en la misma costa Atlántica, los datos oficiales de la CNE cuantificaron el monto de las pérdidas económicas en cerca de 3.5 mil millones de colones. Esta cifra excede por mucho lo que los cálculos preliminares arrojan para las recientes inundaciones. Aquí es interesante observar también que en el momento de las inundaciones de 1991 el gobierno fue citado. Este manifestó que el impacto de éstas podría ser mayor que el del terremoto de abril de 1991, para el cual fuentes oficiales habían calculado casi 30 mil millones de colones de pérdidas.

En suma, el manejo de las apreciaciones preliminares sobre la magnitud e impacto de desastres debe ser más cuidadoso. La parcialidad debe ser sustituida por la integralidad. Los calificativos sobre la magnitud como "peores", "más serios", "más grandes", etc. deben tomar en cuenta tanto la fase del desastre a la cual se refiere (emergencia, rehabilitación, reconstrucción) y la suma de los posibles impactos (directos e indirectos, a corto, mediano y largo plazo).

SOBRE LA TEMPORALIDAD DEL DESASTRE

Mucho se ha escrito sobre la importancia de la hora y del día de la semana en que suceden los desastres, su impacto en términos de número de muertos, lisiados y en las dificultades logísticas de manejo de las primeras horas de la emergencia.

En el caso de las inundaciones de Limón, se abre otra línea de análisis referente al impacto que podría tener en el manejo del desastre, de un evento que sucede en el período inmediatamente prenavideño (y prevacacional). Este impacto podría analizarse tanto desde la perspectiva de los potenciales problemas que surgen en lo que se refiere a la participación individual e institucional en el manejo de la emergencia y en las donaciones de bienes y efectivo por parte de individuos, instituciones gubernamentales, ONGs y agencias o fundaciones internacionales; como en cuanto al manejo de las fases de rehabilitación y reconstrucción. En estos últimos casos, por ejemplo, el problema de las asignaciones presupuestarias necesarias por parte de instituciones gubernamentales para hacer efectivas de manera ágil estas tareas no puede dejar de ser afectado, por ser el fin del año presupuestario de las instituciones.

Además, en el caso de Costa Rica estas inundaciones coincidieron con el período más álgido de la contienda política previa a las elecciones nacionales de febrero de 1994, lo cual abre la perspectiva de un análisis del posible impacto de la "política" sobre el manejo de desastres, tema de larga tradición.

SOBRE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN: ANÁLISIS CIENTÍFICO Y CONTROLES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

Las últimas inundaciones, derrumbes y deslizamientos traen a colación una vez más el viejo problema de la relación entre el conocimiento científico sobre la existencia de

zonas de amenaza o riesgo y la posibilidad de la prevención y mitigación de desastres. En este caso el suceso más trágico (y más difundido en la prensa) constituye la muerte de cuatro personas por un derrumbe sobre su humilde vivienda en Turrialba, contando con evaluaciones realizadas por geólogos posteriores al terremoto de 1991 que claramente indicaron los riesgos que enfrentaba la zona. Además de los múltiples ejemplos menos trágicos de comunidades afectadas por los sucesos de diciembre en zonas de reconocida peligrosidad, se presenta una desigual relación entre la existencia de evaluaciones de amenazas por zona, la ocupación humana de las mismas, y los eventos trágicos habían ya sido ampliamente divulgados en los casos de la destrucción de comunidades (y los muertos) causados por derrumbes en La Uruca (ciudad de San José) y en Argacibia de Miramar (zona rural) este mismo año.

Surge con claridad el viejo dilema de la existencia de una relativa información sobre amenazas (su temporalidad y espacialidad) y una baja capacidad del control sobre la ocupación humana de las zonas de riesgos. Desde la perspectiva de los pobladores, los escasos recursos económicos y el incremento de la población los "obligan" a ocupar terrenos de bajo valor, muchos bajo riesgo de amenazas naturales. Desde la perspectiva del Estado y sus instancias de gobierno (nacional o local) no existen por una parte los controles adecuados para el uso del suelo, a pesar de la existencia de una normatividad y legislación amplia referente al uso de zonas de amenaza; y por otra parte, no cuenta con mecanismos (ni recursos -se argumenta) para la reubicación de las comunidades amenazadas o para la puesta en práctica de mecanismos efectivos de prevención y mitigación in situ. El problema tiende a aumentar en lugar de disminuir, aspecto que exige nuevos y más adecuados enfoques que los que se emplean hoy en día. La esencia de éstos debe desagregarse en educación, capacitación y en la participación comunitaria en la identificación y resolución de sus problemas.

SOBRE LA DESCENTRALIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN LOCAL

Los sucesos de diciembre de 1993 y el manejo del contexto de emergencia sirven para enfatizar la necesidad de aumentar los esfuerzos y los recursos dedicados a la descentralización del manejo de los desastres en el país hacia los niveles regional y local. El movimiento en esta dirección, estimulado principalmente por las experiencias vividas con el terremoto e inundaciones de 1991, e impulsado por la CNE distan mucho de ser suficientes. Problemas logísticos encontrados en la entrega y distribución del socorro, en la evaluación por subzona y localidad de las necesidades e impactos, en el acceso a la maquinaria necesaria para la rehabilitación de caminos, infraestructura, etc. ilustran los problemas que acompañan a una baja capacidad de respuesta y a una incompleta inserción de sectores y organizaciones regionales y locales en el manejo de los desastres.

El problema de la centralización logística,

operativa y de decisión (dentro de una estructura gubernamental de por sí altamente centralizada y con débiles niveles intermedios o locales) y la clara identificación que hace la población entre el manejo y la unidad central de la CNE, ubicada en San José, combinado con la relación que se hace entre ésta y el gobierno de turno, en términos políticos, suman problemas adicionales en el manejo de la fase de emergencia. Entre éstos es posible sugerir que exista una "demanda irracional" para la remisión de cantidades innecesarias de alimentos (acompañado por protestas, quejas, etc.) que deriva, de una dependencia creada entre la población local y el gobierno central. Esta dependencia, junto con la idea de derecho natural y resentimiento histórico, se le hace difícil de resistir al gobierno, debido a políticas electorales propagandísticas y otros. Mayor participación y recursos logísticos locales seguramente conducirán a una mejor adecuación entre las demandas y necesidades reales y, por consiguiente, en las asignaciones hechas, tanto en la fase de emergencia como en las de rehabilitación y reconstrucción. **(LAREO)**

